



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2.023)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Apelación de auto: 05001 31 03 015 2016 00311 02

Proceso: Ejecutivo hipotecario.
Demandante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA-.
Demandado: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. –FIDUCENTRAL S.A.-, vocera y administradora del FIDEICOMISO ARRAYANES.
Extracto: 1. No se advierte la falta de competencia de quien efectuó la almoneda, ya que existe norma expresa señalando que el proceso civil se adelantará hasta el remate, sin que la concurrencia de embargos lo afecte.
2. Conforme al artículo 455 del C. G. del P., las solicitudes de nulidad que se formulen después de la adjudicación, no serán oídas.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto calendado el catorce (14) de octubre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín, el cual rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por la recurrente.

ANTECEDENTES

Del pedido de nulidad:

Arguyó la demandada que el 11 de agosto de 2.022 se efectuó la diligencia de remate respecto al inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria (M.I.) 020-83782, acto en el que el Juzgado de Ejecución

advirtió sobre la concurrencia de embargo proveniente de la Unidad de Cobro Coactivo del Municipio de Rionegro; pese a ello el único que ofertó fue el ejecutante por cuenta de su crédito en cuantía de \$21.793'561.750.00, quien ante la advertencia del Juzgado, expresó:

"... en virtud de la existencia de un acreedor remanentista y de mejor derecho que es el Municipio de Rionegro - Antioquia, el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA- IDEA tiene la intención de adjudicarse el inmueble objeto de remate por cuenta de su crédito, y se compromete a pagar el impuesto predial del inmueble objeto de subasta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que apruebe la adjudicación"

En lo anterior funda la demandada recurrente sus cuestionamientos frente a la validez del trámite, alegando, en primer lugar, que conforme el artículo 453 del C. G. del P., tratándose de rematante por cuenta de su crédito, sólo podía hacer postura el único ejecutante o acreedor de mejor derecho, lo que no se satisface pues la deuda Fiscal es de primera clase (art. 2495 C.C.), mientras la acreencia con garantía hipotecaria en ejecución es un crédito de tercera (art. 2497 ídem), por lo que no podía rematarse como se hizo, ya que la parte actora no era única ejecutante ni el acreedora de mejor derecho.

Adicionalmente, conforme el artículo 839 del Estatuto Tributario el Juzgado que realizó la almoneda carece de competencia, en la medida que el crédito del Fisco es de grado superior al de este proceso ejecutivo, configurándose la causal de nulidad dispuesta en el artículo 133.1 procesal civil, sobre todo considerando el precedente del mismo Despacho en el proceso 016 2015 01174, caso similar y en el que existiendo acreedores de mejor derecho, el remate se dejó sin valor.

Así, deprecó anular la almoneda, y en su lugar remitir la actuación al funcionario con competencia para realizar el remate y la adjudicación¹.

¹ Archivo 01 Cuaderno incidente de nulidad.

Del rechazo y los recursos:

En auto del 14 de octubre de 2.022 el *a quo* rechazó de plano la solicitud de nulidad, considerando que las anomalías que afecten la validez de lo actuado se sana al no alegarse antes de la adjudicación, aunado a que no puede alegar la nulidad quien actuó después de ocurrida, tal como deriva de los artículos 133, 135 y 455 procesal civil.

Así, que la abogada de la demandada estuvo de inicio a fin en la diligencia de remate, pudiendo alegar la irregularidad y oponerse a la adjudicación realizada; sin embargo, no ocurrió. Destacó que ese era el momento y la oportunidad para exponer sobre irregularidades.

En cuanto a la competencia, expuso que la concurrencia de embargo no la afecta tal como lo establece el artículo 465 del C. G. del P., idea reforzada por la doctrina². Finalizó indicando que su propio precedente (016 2015 01174), trata de un asunto diferente en relación a los hechos del presente, pues no se trataba de concurrencia de embargos, por lo que no existe desconocimiento o contradicción respecto a otros casos.

Que lo buscado por el artículo 465 del C. G. del P. es proteger a los acreedores de mejor derecho, siendo su objetivo que a estos se les pague primero, y en este caso así se hizo, pues no se desconoció la prevalencia o el espíritu de la norma, ya que la aprobación del remate se condicionó a que el ejecutante cancelara la acreencia Fiscal³.

² Para el efecto citó a la Sala Civil de la Corte Suprema Justicia, que en providencia STC3810-2020 indicó: “... el artículo 465 de la Ley 1564 de 2012 se ocupa de la “conurrencia de embargos” decretados en juicios civiles y los ordenados en pleitos de diferentes especialidades que circunscribe a la laboral (ejecutivo), jurisdicción coactiva y de alimentos, donde se pregona que en tal caso el proceso continúa ante el juzgador civil, quien debe adelantarlos, y una vez producido el remate, establecer la correspondiente prelación de créditos y pagar a los acreedores según ella..

³ Archivo 02 Cuaderno incidente de nulidad.

Frente a lo anterior la demandada presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que la diligencia de remate no era el único escenario para plantear nulidades, máxime cuando la actuación sigue afectada, precisando que la oportunidad precluye con el auto aprobatorio.

Agregó que la ausencia de competencia es insanable, y nada se dijo sobre la competencia existiendo acreencias de superior rango⁴.

En providencia del 31 de marzo pasado no se repuso la decisión, explicándose sobre la oportunidad para alegar la nulidad, que es antes de la adjudicación, tal como lo indica el artículo 455 procesal civil, lo que es distinto de la aprobación, la cual deviene de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 453 ídem⁵.

Sobre la competencia, insistió en que no se pierde con la concurrencia de un embargo coactivo; y volviendo sobre la STC3810-2020, dijo que en los eventos de concurrencia, el proceso continúa ante el juzgador civil quien debe adelantarlos, y una vez producido el remate, le corresponde establecer la prelación de créditos para pagar a los acreedores. Concedió la apelación subsidiariamente deprecada⁶.

Así las cosas, por tratarse de providencia apelable según el artículo 321.5 del C. G. del P., se procede a resolver la alzada, previas:

⁴ Archivo 03 ídem.

⁵ Para el efecto citó providencia de la Corte Constitucional que indicó: “Sin embargo, la eventual contradicción quedó resuelta desde el año 2010 a partir de la expedición de la Ley 1395, que derogó el citado numeral segundo del artículo 141, de forma tal que debe entenderse que la regla que debe seguirse de allí en adelante es la contenida en los artículos 527 y 530 según la cual las nulidades deben alegarse antes de la adjudicación del bien que se produce en la diligencia de remate, so pena de considerarse saneadas”. (Sentencia T 323 de 2.014).

⁶ Archivo 37 Cuaderno Principal.

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, ello dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 del C. G. del P.⁷.

Circunscritos a los reparos del recurrente, hemos de pronunciarnos en relación a los siguientes problemas jurídicos. ¿Era competente el *a quo* para realizar la diligencia de remate censurada, dada la concurrencia del embargo Fiscal?; y, ¿cuál es la oportunidad para alegar irregularidades respecto a la diligencia de remate?

En lo tocante al primer cuestionamiento, es claro que el 4 de junio de 2.021 la Subsecretaría de Rentas del Municipio de Rionegro, mediante el oficio 4206 del 14 de mayo de 2.021, aludiendo a la prelación de créditos, comunicó de cara a este proceso que:

“Mediante la presente comunicamos a su despacho que se resolvió librar mandamiento de pago en contra del contribuyente FIDUCIARIA CENTRAL, identificado con Nit N° 800.171.372-1, en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso Arrayanes, identificado con Nit N° 830.053 036-3, debido a las deudas fiscales que posee con el municipio, por concepto del no pago de Impuesto Predial Unificado, ordenándose el embargo del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-83782, sobre el cual pesa adicionalmente embargo ordenado por su despacho dentro del proceso de la referencia.

“En consecuencia, solicitamos respetuosamente tener en cuenta lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 465, 466 y demás concordantes de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso); en concordancia con el artículo 839 del Estatuto Tributario Nacional, norma especial aplicable a este tipo de embargos. con la finalidad de que sea inscrito el embargo de remanentes o el embargo de lo que se llegare a desembargar en el proceso de referencia. (...)”⁸

⁷ El citado artículo en su parte pertinente dice; “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante...”.

⁸ Folios 25-26 archivo 001(026) en la Carpeta denominada “05001310301520160031100”

Al respecto, el a quo se pronunció a través del oficio 1269 del 15 de junio de 2.021, informando que:

“SE TOMA ATENTA NOTA del embargo de remanentes para el proceso de cobro coactivo adelantado por la ALCALDIA DE RIONEGRO en contra del aquí demandado, contribuyente FIDUCIARIA CENTRAL en calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO ARRAYANES.”⁹

Con fundamento en lo anterior es que la recurrente citando el artículo 839 del Estatuto Tributario¹⁰, señaló que el Juzgado que realizó la almoneda carece de competencia, en la medida que el crédito del fisco es de grado superior al de este proceso.

El artículo 465 del C. G. del P., establece:

“Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Cuando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicción coactiva o de alimentos se decreta el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate.

“El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral, de familia o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto se comunicará por oficio al juez del proceso laboral, de familia o al funcionario que adelante el de jurisdicción coactiva. Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podrán interponer reposición dentro de los diez (10) días siguientes al del recibo del oficio. Los gastos hechos para el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelarán con el producto del remate y con preferencia al pago de los créditos laborales, fiscales y de alimentos.” Subrayado intencional.

⁹ Folio 30 ídem.

¹⁰ Dicha norma reza que: *“ARTICULO 839. REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la Administración y al juez que ordenó el embargo anterior... “En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario de Cobranzas continuará con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobranzas se hará parte en el proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado.”.* Subraya adrede.

De lo tal norma se tiene que aun existiendo embargos en otras especialidades, no se afecta la competencia del juez civil, aunque debe respetarse la prelación de créditos establecida en el Código Civil, punto del que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela y en un caso de aristas similares al presente, expuso:

“(…) la Sala señala que no le asiste razón al actor constitucional, cuando en su escrito de impugnación afirmó que existe una prevalencia normativa del Estatuto Tributario de Colombia sobre el Código General del Proceso (…)

“Y es que, de la providencia de 29 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, no se evidencia arbitraria ni irrazonable, lo anterior, teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 465 del Código General del Proceso, enseña que,

“Cuando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicción coactiva o de alimentos se decreta el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate.

“El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral, de familia o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial (…) (se destaca).

“Puestas de este modo las cosas, ninguna discrepancia o conflicto se advierte entre las normas relacionadas, de las que se concluye que ya sea en el proceso de la justicia civil o del cobro coactivo administrativo, quien conoce del proceso en el que se decreta primero el embargo de bienes, lo tramitará hasta su remate y tendrá en cuenta el embargo de remanentes solicitado por el otro funcionario, sin ser necesaria la remisión de la diligencia de secuestro ni y del avalúo, excepto en el evento de que alguno de estos termine anticipadamente.

“Una vez efectuado el remate de los bienes, su producto será distribuidos entre los acreedores, teniendo en cuenta la prelación de créditos de que trata el artículo 2494 y siguientes del Código Civil.

“5. En este caso, como el inmueble gravado con hipoteca fue embargado primero en el proceso que adelanta el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, este continuará su trámite hasta que el mismo sea rematado. Luego distribuirá su producto entre todos los acreedores, teniendo en cuenta los embargos de remanentes que le hayan sido comunicados y atendiendo la prelación de créditos aludida.

“Así pues, se reitera, la decisión censurada adoptada por la autoridad judicial accionada, se acompasa con las reglas procedimentales instituidas en el ordenamiento jurídico, para dar solución al problema jurídico ventilado, lo que permite descartar la transgresión de los derechos fundamentales de los que se busca su protección. (...)”. *Cursiva y subraya en texto original.* STC11122-2022.

Es por lo anterior que no se advierte la falta de competencia alegada, existiendo norma procesal que autoriza, en caso de concurrencia de embargos en procesos de distintas especialidades, que el proceso civil se adelante hasta el remate de los bienes, concluyendo que el correspondiente reparo no está llamado a prosperar.

Sobre el segundo reparo debemos responder al cuestionamiento sobre la oportunidad para alegar irregularidades de la diligencia de remate, que en primer lugar, debe resaltarse que tal acto es una venta de bienes, que aun siendo forzada impone la atención de especiales formalidades sustanciales y procesales, debiendo las mismas respetarse procurando que el negocio no esté viciado de nulidad.

Sobre las nulidades, ha dicho la doctrina que son irregularidades que en el marco de un trámite afectan el debido proceso, y por su gravedad invalidan las actuaciones surtidas; por eso declarándolas se controla la validez de la actuación y se asegura a las partes el correspondiente derecho constitucional, eso sí, las causales de nulidad son taxativas, es decir, no son otras que las previstas expresamente en la ley¹¹.

El artículo 132 del C. G. del P. impone al Juez el deber de realizar el control de legalidad en cada etapa del proceso, buscando *“corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso”*, anotándose que; *“salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.”*

¹¹ Ver los autos ATC316-2022 y ATC500-2022, ambos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ver también la sentencia T-125 de 2010 de la Corte Constitucional.

Respecto a las eventuales irregularidades frente a la diligencia de remate, el artículo 455 ibidem establece:

“Artículo 455. Saneamiento de nulidades y aprobación del remate. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación... Las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas.”.

De lo subrayado se tiene que las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación.

En el caso en estudio la adjudicación del bien rematado se realizó en la correspondiente audiencia, tal como lo prevé el inciso 2º del artículo 452 del C. G. del P., la cual se llevó a cabo el 11 de agosto de 2.022, y aunque la parte hoy recurrente mediante apoderada estuvo presente ese día, apenas el 6 de septiembre siguiente expuso sobre la presunta irregularidad, evidenciándose que actuó fuera del término legal previsto.

Así, contrario al dicho de la recurrente, feneció la oportunidad para alegar la irregularidad, y es que las solicitudes de nulidad formuladas después de la adjudicación, *“no serán oídas”*, punto concordante con la doctrina de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia¹²; sin que se pueda pasar por alto que el acreedor fisco no ofertó, y que se respetó la prelación de créditos, garantizándose el pago de la

¹² Tal Corporación, indicó: “Con todo, aunque se insistiera en que ocurrió una irregularidad que afectaba la validez de la subasta, de todos modos para el momento en el que se incoó la acusación resultaba inoportuno adoptar cualquier determinación al respecto, puesto que las peticiones de anulación radicadas con posterioridad a la adjudicación de los bienes materia de remate no serían oídas, conforme lo señala el artículo 455 de nuestro estatuto procesal, en tanto *«[l]as irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación»*. Y como en este asunto ya se adjudicó el bien a Andrea Isabel Prada Ricardo, resulta sencillo afirmar que todos los eventuales yerros ocurridos con anterioridad a ese momento quedaron saneados por ministerio de la ley.”. Cursiva y comillas en el texto original. STC4293-2021. Ver también STC11179-2020.

acreencia al Municipio de Rionegro, aspecto debidamente acreditado por el rematante¹³.

Corolario, siendo acertada la decisión del *a quo*, la misma está llamada a ser confirmada. Sin costas en esta instancia en tanto no se advierte su causación (artículo 365.8 ídem).

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín;

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado auto del catorce (14) de octubre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín, según se motivó.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO

¹³ Ver folios 61 y siguientes del archivo 09, Cuaderno principal.